DECRETO 212/1961, de 2 de febrero, por el que se indulta a Eduardo Vallejo Fernández, Diego Montero Molina, Felipe Godoy Acosta, Pedro Guillén Sánchez y José Díaz Benítez del resto de la prisión por insolvencia que les queda por cumplir en materia de contrabando.

Visto el expediente de indulto de Eduardo Vallejo Fernández, Diego Montero Molina, Felipe Godoy Acosta, Pedro Guillén Sánchez y José Díaz Benítez, sancionados por el Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación de Málaga en veinticinco de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, en el expediente número quinientos seis de dicho año, como autores de una infracción de contrabando de mayor cuantía, a la multa de trescientas cuarenta y siete mil cuarenta pesetas con cuarenta y ocho céntimos, los dos primeros, y a la de doscientas noventa y cinco mil trescientas cincuenta y tres pesetas con sesenta céntimos, los tres restantes, por concurrir en estos últimos una atenuante, con la subsidiaria, en todos ellos, en caso de insolvencia, de cuatro años de prisión, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia del indulto; el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto refundido vigente de la Ley de Contrabando y Defraudación aprobado por Decreto de once de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres;

De acuerdo con el parecer del Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación de Málaga y del Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,

Vengo en indultar a Eduardo Vallejo Fernández, Diego Montero Molina, Felipe Godoy Acosta, Pedro Guillén Sánchez y José Díaz Benítez del resto de la prisión por insolvencia que les queda por cumplir y que les fue impuesta en el citado expediente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO 213/1961, de 2 de febrero, por el que se indulta a Eulalia Encuentra Morrano de las penas penitenciarias impuestas.

Visto el expediente de indulto de Eulalia Encuentra Morrano, condenada por la Audiencia Provincial de Huesca en sentencia de siete de junio de mil novecientos cincuenta y siete, como autora de un delito de escándalo público y otro de abandono de familia, a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de dos mil quinientas pesetas por cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,

Vengo en indultar a Eulalia Encuentra Morrano de las dos penas de multa que le fueron impuestas en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO 214/1961, de 2 de febrero, por el que se indulta a Ezequiel García Alcón del resto de la pena que le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Ezequiel García Alcón, condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de veintiocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, como autor de un delito de hurto, con abuso de confianza, y en cuantía que no excede de cincuenta mil pesetas, a la pena de seis años y un día de presidio mayor, casando la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en quince de diciembre de

mil novecientos cincuenta y tres, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;

Oído el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el parecer del Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,

Vengo en indultar a Ezequiel García Alcón del resto de la pena privativa de libertad que le queda por cumplir, y que le fue impuesta en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDENES de 31 de enero de 1961 por las que se dispone el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los señores que se citan.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre partes: de una, como demandante, don Pablo Carretero Santodomingo, Sargento de la Guardia Civil en situación de retirado voluntario, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre revocación del acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar en 15 de octubre de 1959, confirmando en trámite de reposición por otra del mismo Consejo fecha 8 de enero de 1960, mediante los cuales se clasificó el haber pasivo del recurrente, se ha dictado sentencia con fecha 7 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo Carretero Santodomingo contra el acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar fecha 15 de octubre de 1959, mediante el cual se reguló su haber pasivo, cuyo acuerdo fué confirmado en trámite de reposición por otro del mismo Consejo de 8 de enero de 1960, debemos declarar y declaramos ajustados a Derecho ambos actos administrativos, que quedarán firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la demanda deducida, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en estas actuaciones. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Tomás García Lerín, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la Resolución de 8 de octubre de 1959, dictada por la Dirección General de Instrucción y Enseñanza del Estado Mayor Central del Ejército, que le escalafonó a continuación de don Felipe Moreno

Fernández, y que fué confirmada por una Orden del Ministerio del Ejército de 18 de enero de 1960 al ser desestimado el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, se ha dictado sentencia con fecha 3 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Tomás García Lerín contra la Resolución dictada por la Dirección General de Instrucción y Enseñanza del Estado Mayor Central del Ejército de 8 de octubre de 1959, que fué confirmada en reposición por Orden del Ministerio del Ejército de 18 de enero de 1960, por la que se denegó su escalafonamiento en el Arma de Infantería en lugar preferente al concedido, y que se fijó en el suplico de la demanda a continuación del Comandante don Víctor Lago Román, o en forma alternativa, nunca en número superior al mil quinientos, que corresponde al tres mil ciento cincuenta del Escalafón General, debemos declarar y declaramos firmes y subsistentes dichas resoluciones, que confirmamos, absolviendo, en consecuencia, a la Administración General del Estado, sin hacer especial imposición en cuanto a las costas causadas en este pleito. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército (Dirección General de Instrucción y Enseñanza).

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, el Procurador don José Granados Weil, en nombre y representación del Consejo Superior de Colegiados Titulares Mercantiles, bajo la dirección de Letrado, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre nulidad de la Orden dictada por el Ministerio del Ejército con fecha 5 de noviembre de 1959, en cuanto aprobó la convocatoria de ingreso en la Academia de Intervención Militar y las instrucciones para su desarrollo, y que se declare el derecho de los Profesores Mercantiles a participar en las oposiciones de ingreso en la expresada Academia, se ha dictado sentencia con fecha 26 de septiembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la alegación hecha en la contestación a la demanda relativa de la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles contra la Orden dictada por el Ministerio del Ejército con fecha 5 de noviembre de 1959, que aprobó las instrucciones para la convocatoria de ingreso en la Academia de Intervención Militar, y desestimando igualmente dicho recurso, debemos declarar y declaramos ajustados a derecho el expresado acto administrativo, que quedará firme y subsistente, absolviendo de la demanda y sus pedimentos a la Administración, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en estas actuaciones. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército (Dirección General de Instrucción y Enseñanza).

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Juan Domínguez Rojo, Capitán de la Guardia Civil, representado por Procurador, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada por el Abogado del Estado, contra Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 9 de octubre de 1959, que le denegó el abono de las gratificaciones de destino y de compensación de ordenanza en el período entre febrero del año 1955 y octubre de 1958, contra otra Resolución de la misma Dirección de 30 de diciembre de 1959, que desestimó recurso de reposición interpuesto contra el anterior acuerdo, se ha dictado sentencia con fecha 13 de octubre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Domínguez Rojo, representado por el Procurador don Ramiro Reynols de Miguel, contra las Resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil de 9 de octubre y 30 de diciembre de 1959, que denegaron el abono de las gratificaciones de «destino» y de «compensación» de ordenanza, en el período comprendido entre febrero de 1955 y octubre de 1958 al referido recurrente, debemos confirmar y confirmamos dichas Resoluciones, que declaramos firmes y subsistentes, absolviéndose en consecuencia a la Administración General del Estado, sin hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas en el presente pleito. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, debiendo publicarse la misma en el «Boletín Oficial del Estado» e insertarse en la «Colección Legislativa.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General, Director general de la Guardia Civil.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, el Capitán de Artillería don Agapito Bueno Jiménez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra revocación de acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de septiembre de 1959, que clasificó el haber pasivo del recurrente y que fué confirmado en trámite de reposición por otro acuerdo del mismo Consejo de 2 de febrero de 1960, se ha dictado sentencia con fecha 21 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpuesto por don Agapito Bueno Jiménez contra el acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de septiembre de 1959, que clasificó su haber pasivo y que fué confirmado en trámite de reposición mediante otro acuerdo de 2 de febrero de 1960, debemos declarar y declaramos ajustados

• derecho ambos actos administrativos, que quedarán firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la demanda y sus pedimentos, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en estas actuaciones. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Santiago Pérez Forneas, ex Guardia Civil segundo de Mar, representado por Procurador y defendido por Letrado, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 12 de diciembre de 1957, por la que se acordó la expulsión del Cuerpo de la Guardia Civil, a que pertenecía el recurrente, desestimándose el recurso interpuesto contra la meritada Resolución por otra de la misma Dirección, que fué notificada el 27 de julio de 1959, se ha dictado sentencia con fecha 10 de octubre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Pérez Forneas, representado por el Procurador don Leandro Navarro Ungria, contra las Resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil de 12 de diciembre de 1957 y la notificada en 27 de julio de 1959, confirmatoria de la anterior, por la que se acordó la expulsión del recurrente del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, sin hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas en este pleito. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Director general de la Guardia Civil.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Teodosio García García, Teniente de Infantería, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución del Ministerio del Ejército de 7 de noviembre de 1959, desestimando recurso de reposición denegándole el ascenso al empleo inmediato en 24 de septiembre del mismo año, se ha dictado sentencia con fecha 31 de octubre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el motivo de inadmisibilidad alegado por el Abogado del Estado e igualmente desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Teodosio García García, contra la Orden del Ministerio del Ejército de 7 de noviembre de 1959, que denegó reposición de la Resolución del mismo Departamento de 24 de septiembre del año expresado, rechazando petición de ascenso a empleo de Capitán, declaramos ajustados a Derecho dichos actos administrativos y absolvemos a la Administración de la demanda y sus pretensiones, sin especial imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal de este Ministerio.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Ignacio Bascañán Morales, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre impugnación de Orden del Ministerio del Ejército fecha 30 de marzo de 1959, que denegó al hoy recurrente gratificación de profesorado, se ha dictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Maestro Armero, perteneciente a la Segunda Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, don Ignacio Bascañán Morales contra la Orden del Ministerio del Ejército fecha 30 de marzo de 1959, que denegó su pretendido derecho al percibo de la gratificación de Profesorado, toda vez que aun destinado en la Escuela Politécnica del Ejército no desempeña en ella función docente, debemos declarar y declaramos ser conforme al ordenamiento jurídico la expresada Resolución, la que en su virtud confirmamos, sin imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal de este Ministerio.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don José María Hidalgo Redondo, Comandante de Ingenieros, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre impugnación de Resoluciones del Ministerio del Ejército fechas 19 de septiembre y 17 de noviembre de 1959,

de las cuales la primera denegó al hoy recurrente el ascenso a Teniente Coronel y la segunda desestimó el recurso de reposición, se ha dictado sentencia con fecha 26 de septiembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso promovido por don José María Hidalgo Redondo contra las Ordeens del Ministerio del Ejército de 24 y 28 de septiembre de 1954 y las Resoluciones de dicho Ministerio, de 19 de septiembre y 17 de noviembre de 1959, sobre ascenso del actor al empleo de Teniente Coronel de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Militares, debemos confirmar y confirmamos, por ser ajustados a Derecho, dichos actos administrativos, que declaramos firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la demanda, sin especial imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal de este Ministerio.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Pasirates Domínguez San Miguel, Teniente de la Guardia Civil, retirado, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre impugnación de acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar fecha 12 de mayo de 1959, comunicado al Ministerio del Ejército el 8 de junio, que señaló los haberes pasivos al hoy recurrente, y contra el acto denegatorio del recurso de reposición, se ha dictado sentencia con fecha 17 de junio de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso promovido por don Pasirates Domínguez San Miguel contra las Resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de mayo y 15 de septiembre de 1959, sobre señalamiento de haber pasivo, debemos confirmar y confirmamos dichos actos administrativos por ser ajustados a Derecho, que declaramos firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la demanda, sin especial imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Fran-

cisco García García, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de febrero de 1959, que le señaló el haber pasivo, y de 12 del mismo año, que desestimó el recurso de reposición formulado contra el primero, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la desestimación del recurso interpuesto por don Francisco García García contra las Resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de febrero y 12 de mayo, ambas de 1959, por hallarse ajustadas a Derecho, confirmando las íntegramente en cuanto fijaban al dicho Capitán el haber pasivo de retiro mensual de tres mil cuatrocientas dieciocho pesetas con setenta y cuatro céntimos, al cual se acumulará la percepción de cuatrocientas pesetas mensuales de pensión, por hallarse en posesión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, sin que haya lugar a imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Antonio Barrachina Garde, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre revocación de acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 6 de noviembre de 1959 y 26 de febrero de 1960, se ha dictado sentencia con fecha 25 de octubre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Antonio Barrachina Garde contra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar del 6 de noviembre de 1959 y 26 de febrero de 1960, por los que se hizo señalamiento de haber pasivo, debemos revocar y revocamos dichas Resoluciones por no ser ajustadas a Derecho, y en su lugar declaramos el del interesado a percibir como pensión de retiro el 90 por 100 del sueldo regulador mensual de 4.384,70 pesetas, con efectos desde el 1 de septiembre de 1959, sin que proceda condena de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Laureano Martín Fernández, Cabo, Caballero mutilado permanente, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre revocación de la Resolución dictada por el Ministerio del Ejército en 17 de agosto de 1959, confirmada en trámite de reposición por otra del mismo Departamento fecha 5 de enero de 1960, mediante las cuales se le denegó el derecho a percibir la pensión vitalicia que tenía reconocida y cobraba con anterioridad en cuantía de dos mil quinientas pesetas al año, se ha dictado sentencia con fecha 27 de junio de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cabo Caballero mutilado permanente don Laureano Martín Fernández contra la Resolución dictada por el Ministerio del Ejército en 17 de agosto de 1959, confirmada en trámite de reposición por otra del mismo Departamento fecha 5 de enero de 1960, mediante las cuales se le denegó el derecho a percibir la pensión vitalicia que tenía reconocida de dos mil quinientas pesetas al año, debemos revocar y revocamos ambos actos administrativos por no conformes a Derecho, declarando que debe serle abonada al recurrente dicha pensión desde 31 de diciembre de 1958 hasta fin de abril de 1960, según solicita, condenando a la Administración a estar y pasar por estas declaraciones, así como a su cumplimiento, sin hacer expresa imposición de costas de este recurso. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la Patria.

• • •

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Ramón Montero Suárez, Capitán de Infantería, representado y defendido por el Letrado don Moisés Guillamón Salcedo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 22 de enero de 1960, comunicado en 19 de febrero siguiente, señalando pensión de retiro del recurrente, se ha dictado sentencia con fecha 14 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Montero Suárez contra el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar fecha 22 de enero de 1960, comunicado el 7 de marzo siguiente en orden del Gobernador militar de Zaragoza de 19 de febrero anterior, por el que se fijó la pensión de retiro de Capitán del recurrente, absolviendo a la Administración de las pretensiones de la demanda y declarando ajustados a Derecho dicho acuerdo, sin especial imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1961.

BARROSO

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

• • •

RESOLUCION de la Junta Liquidadora de Material Automóvil por la que se anuncia venta pública para la enajenación de camiones, coches ligeros, motocicletas y diverso material.

La Junta Liquidadora del Material Automóvil del Ministerio del Ejército anuncia venta pública para enajenar el material relacionado en los pliegos de condiciones expuestos en la Secretaría de la Junta (Bretón de los Herreros, 49, de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas). Jefaturas Regionales de Automovilismo y Bases de Talleres, acto que tendrá lugar en Burgos el día 2 de marzo de 1961, en los locales que ocupa la Base de Parques y Talleres de Automovilismo de la Sexta Región Militar (avenida del Dos de Mayo), a las diez horas.

Las proposiciones, reintegradas con póliza de seis pesetas, certificadas y dirigidas al excelentísimo señor General Presidente de la Junta Liquidadora (Ministerio del Ejército), conviene sean remitidas con cuatro días de antelación a la fecha de la celebración de la subasta.

Anuncios a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de febrero de 1961.—777.

• • •

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 215/1961, de 2 de febrero, por el que se conceden bonificaciones arancelarias durante el año 1961 a las importaciones de huevos frescos que se realicen por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.

La Ley Arancelaria número uno/novecientos sesenta, de fecha primero de mayo del año mil novecientos sesenta, establece en el apartado C) de su artículo tercero que en determinados casos de marcado interés público puedan concederse a título excepcional bonificaciones en los derechos de Arancel de importación de mercancías.

Las importaciones de huevos frescos por la Comisaría General de Abastecimientos que lleguen o hayan llegado a puerto español en el periodo comprendido desde el quince de noviembre de mil novecientos sesenta al quince de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, y cuya totalidad no exceda de doscientas mil cajas de treinta docenas destinadas a evitar un desfase del mercado interior con el consiguiente encarecimiento en este artículo, se puede considerar por su fin y por el Organismo importador que tales importaciones encajan dentro del concepto de interés público requerido por la Ley Arancelaria

Por ello, y por los beneficios que se han de deducir en favor del normal abastecimiento de huevos en cantidad, calidad y precios al país, hace aconsejable la concesión de bonificaciones arancelarias a las mencionadas importaciones en cuantía variable en cada caso, suficiente para estrictamente nivelar los costos exteriores con los interiores, según los precios de ambos mercados en cada momento, y en su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con el preceptivo y favorable informe del de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—De acuerdo con lo prevenido en el apartado C) del artículo tercero de la Ley Arancelaria de fecha primero de mayo de mil novecientos sesenta, y con el fin de evitar dislocaciones en el abastecimiento nacional de huevos frescos en determinadas épocas del año y evitar el encarecimiento del mercado, se faculta al Ministerio de Hacienda para que conceda las bonificaciones arancelarias que estime necesarias para equilibrar los costos exteriores con los precios del mercado interior, en cada momento, de los huevos frescos que desde el